

Negligencia criminal en Valencia, la vivienda en manos de caseros rentistas, represión contra los que luchan...

El problema es el CAPITALISMO y quien lo defiende





Víctor Taibo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

La contundente victoria de Donald Trump y su vuelta a la Casa Blanca han causado una fuerte conmoción. Frente a quienes le dieron por finiquitado después del fracasado asalto al Capitolio, minusvalorando el peligro de esta amenaza reaccionaria, Trump regresa más fuerte y desafiante tras batir a Kamala Harris en voto popular.

Respondiendo a una mayoría de encuestas, su victoria no ha sido ajustada: logra tres millones de votos más que en 2020 y es el candidato republicano más apoyado de la historia, mientras Harris pierde casi siete millones respecto a los anteriores comicios.

El fenómeno del trumpismo y el auge global de la ultraderecha responden a causas sociales profundas. Pero los análisis de los medios de comunicación, supuestamente serios y liberales, secundados por una legión de creadores de opinión y representantes de la izquierda reformista, e incluso algunos que se autoproclaman “marxistas”, solo presentan fórmulas tan fáciles de tragar como superficiales. Todo lo explican a partir de las campañas de bulos y desinformación en redes sociales. Qué sencillo. Elon Musk y gente como él serían los responsables de esta “catástrofe para la democracia”.

Pero esta línea de opinión oculta cuidadosamente que el apoyo mediático desplegado en favor de Kamala Harris ha sido incluso más intenso y estruendoso por parte de periódicos y revistas que son sólidos pilares del sistema en EEUU y los países occidentales.

La propaganda, la desinformación y las mentiras siempre han existido bajo el orden capitalista, como bien padecemos día a día en la izquierda combativa

y, sin duda, juegan un papel político relevante en la lucha de clases. Pero por sí solas no explican una victoria de Trump de tamaño envergadura y una derrota tan humillante de los demócratas. Las razones de fondo hay que buscarlas en las crimi-

nales políticas de la Administración Biden, que con tanto ahínco han defendido los medios de comunicación del sistema.

Biden puso en marcha una agenda belicista, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, armando hasta los dientes a Netanyahu para perpetrar el genocidio en Gaza y la brutal agresión contra el Líbano, y empujando a un régimen neofascista como el de Zelenski a una guerra reaccionaria e imperialista. La inmensa mayoría de los medios de comunicación occidentales lo aprobaron y no se cortaron a la hora de amplificar la propaganda sionista con el falaz argumento de su derecho a la “autodefensa”, aplaudiendo a rabiar al Gobierno ucraniano y dando sus bendiciones al incremento del gasto armamentístico de la OTAN.

Los demócratas han gobernado para Wall Street al tiempo que han hundido las condiciones de vida de la clase trabajadora, golpeada por el aumento descontrolado del precio de la vivienda y una inflación que está llenando los bolsillos de las grandes corporaciones. La agen-

da antiinmigración del trumpismo es vomitiva, pero los demócratas han aplicado una legislación igual de cruel en la frontera, igualando el récord de deportaciones de Trump.

Biden y sus colaboradores han hecho gala de una dura represión contra el sindicalismo combativo y la izquierda que lucha, y han recurrido a la brutalidad policial contra las acampadas universitarias en solidaridad con Palestina.

Y, como telón de fondo, la decadencia imparable del imperialismo norteamericano frente a China y Rusia no deja de exacerbar la desestabilización interna de una potencia que, hasta no hace tanto, imponía su orden al mundo.

Un Gobierno de banqueros, multimillonarios, nazis y dementes

Tras su victoria, Trump ha mostrado lo lejos que está dispuesto a llegar para defender los intereses globales de la gran burguesía estadounidense. Algunos nombramientos han reforzado la imagen de excéntrico que cultiva y con la que alimenta la tensión mediática que le rodea. Pero en los asuntos de importancia su política seguirá los dictados de los grandes poderes económicos.

En su Gobierno habrá dos banqueros, Scott Bessent como secretario del Tesoro y Howard Lutnick como secretario de Comercio, ambos CEO de grandes fondos de inversión. Bessent es conocido por enriquecerse junto a George Soros con sus apuestas bursátiles a principios de los noventa del siglo pasado. Pero lo fundamental es que con ambos personajes se aprobarán nuevas rebajas fiscales, como ya ocurrió durante el primer mandato de Trump, para enriquecer aún más a Wall Street, a los bancos y a las grandes corporaciones.

Trump ha anunciado la creación de un Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por otros dos grandes multimillonarios: Elon Musk, el hombre más rico del planeta, según *Forbes*, y Vivek Ramaswamy, magnate del sector farmacéutico. Un

Departamento que tendrá la tarea de eliminar las regulaciones medioambientales, laborales, financieras y recortar la Administración federal. Musk ha prometido que meterá un tijeretazo de hasta dos billones de dólares y despedirá a miles de empleados públicos. Parece que tratan de trasladar el programa de Milei a los EEUU.

Elon Musk, que cada vez se perfila más como la mano derecha de Trump, insiste en que el Gobierno debe funcionar como sus propias empresas, donde se jacta de exigir jornadas de hasta 80 horas semanales. Son los multimillonarios de siempre, los que en los albores del capitalismo acumularon grandes fortunas con el trabajo infantil, y que quieren extender aún más un capitalismo salvaje sin derechos laborales. Los mismos, por cierto, que apoyaron a Hitler o Mussolini con su demagogia antiobrera, anticomunista y antisemita para apuntalar sus negocios.

Otra batalla de gran importancia se va a librar en el Departamento de Educación. Ha designado a la mujer de un magnate de la lucha libre, Linda McMahon, con la intención de expurgar “los planes educativos izquierdistas que propagan la ideología de género y son un derroche de recursos”.

Por supuesto, ha insistido en recortar hasta el hueso el Medicare y el Medicaid, los dos precarios servicios sanitarios públicos que utilizan millones de norteamericanos que carecen de seguro de salud. Y ha nombrado al frente del Departamento de Salud a dos auténticos dementes: Robert F. Kennedy, un adalid de cualquier teoría de la conspiración, y el doctor Mehmet Öz, un antiguo cirujano convertido hace años en una multimillonaria celebridad televisiva que se dedica a estafar con supuestos productos milagrosos para la salud. Pero detrás de estos dos especímenes se ocultan los intereses de las poderosas compañías de seguros y multinacionales de la salud, las que ejecutarán la estrategia de fondo.

A esta lista de banqueros, multimillonarios y tarados se suman neofascistas como Pete Hegseth, designado como secretario de Defensa y, por tanto, cabeza del



**IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA**

Afiliate a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 684 170 620 · Huelva 695 618 094 · Málaga 679 990 319 · Sevilla 611 474 256 · ASTURIAS: 615 014 637 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Toledo 699 956 847
• CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 660 793 089 · Bizkaia 622 174 122 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738
• GALIZA: A Coruña 686 680 720 · Compostela 637 809 184 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 678 420 888 · MADRID: 620 452 387 · PAÍS VALENCIÀ: 685 098 482

www.izquierdarevolucionaria.net • contacto@izquierdarevolucionaria.net • @IzquierdaRevol



Elon Musk

Pete Hegseth

Linda MacMahon

Robert F. Kennedy

Pentágono y del Ejército. Hegseth es un conocido presentador de la Fox, fundamentalista cristiano que exhibe numerosos tatuajes nazis y que llama a una guerra civil contra los movimientos sociales, los antifascistas, sindicalistas e izquierdistas que quieren “matar a nuestros fundadores, a nuestra bandera y al capitalismo”.

Como secretario de Estado ha situado a Marco Rubio, un fiel representante del lobby cubano de Miami, furibundamente sionista, anticomunista y contrario al aborto, y que es un probado halcón belicista defensor de una política agresiva contra China, Irán, Cuba y Venezuela.

La lista se completa con muchos más nombres, como el de Elise Stefanik, nombrada embajadora en la ONU, que considera a esta institución una organización antisemita. Mike Huckabee, elegido para ser embajador en Israel, quien argumenta que “no existe tal cosa como un palestino” y defiende que Israel se anexiona Cisjordania. O Thomas Homan, *el zar de la frontera*, que ya sirvió a la anterior Administración demócrata al frente de la policía fronteriza, y que ha prometido que “dirigirá la mayor operación de deportación que este país haya visto jamás”. Obama concedió en 2015 a este individuo el “Premio al Rango Presidencial” por su trabajo en “operaciones de aplicación de la ley y deportación”.

De cara a estos nombramientos, que deben ser respaldados por el Senado y que generan inquietud en ciertos sectores, Trump ha dicho que maniobrá para imponerlos. El carácter bonapartista de su Administración se acentuará para evitar que ninguna institución u organismo condicione o limite su Presidencia, algo que tiene más fácil que en su anterior mandato ya que cuenta con el control de Congreso, Senado y Tribunal Supremo, y con un Partido Republicano donde nada se mueve sin su aprobación.

La lucha de clases no se detendrá

Pero el Gobierno ultraderechista que ha conformado Trump se enfrenta a un escenario muy complicado.

En el plano exterior ha prometido poner fin a la guerra de Ucrania. Pero la cosa no es tan sencilla. Una retirada in-

mediata o, lo que es lo mismo, forzar a Zelenski a un acuerdo con Putin que implicaría pérdidas territoriales sustanciales para Ucrania supondría una nueva y humillante derrota para el imperialismo norteamericano. Igual que Biden se tuvo que enfrentar al desastre de Afganistán, ahora Trump tendrá que gestionar este revés. Una realidad que le pasará factura.

A pesar de la agenda proisionista de Trump, la continuación del genocidio en Gaza y la invasión del Líbano no están dando frutos positivos para el imperialismo norteamericano. Al revés. Las relaciones con Arabia Saudí y el resto de monarquías del Golfo, con Egipto o Turquía se degradan y exponen aún más a la región a la influencia de China. El descrédito y creciente aislamiento de EEUU, que Trump puede agravar más, no augura nada bueno para los intereses exteriores de Washington.

Como en 2016, Trump promete *hacer América grande de nuevo*, pero su alternativa —recurriendo a una dura política arancelaria contra China y el resto del mundo— puede cosechar los mismos desastrosos resultados que en su anterior mandato. El capitalismo chino es hoy más fuerte que en 2016, y ha multiplicado y diversificado sus inversiones en todo el mundo justamente para esquivar esta política de sanciones.

Trump no puede soslayar que la economía mundial está más entrelazada que en cualquier otro momento. Y romper con esto resulta enormemente complicado. De ahí que su amigo Elon Musk, que genera el 30% de la producción de Tesla en China, se haya pronunciado en contra de la imposición de nuevos aranceles.

En un contexto extraordinariamente difícil para el imperialismo norteamericano, la principal apuesta del trumpismo pasa por poner orden en casa, mantener a raya al “enemigo interno” y golpear a la clase obrera estadounidense. Pero no será tan sencillo.

La promesa de Trump de una deportación masiva de hasta once millones de inmigrantes ilegales ya ha encontrado críticas de importantes sectores empresariales, vinculados tanto a demócratas como a republicanos, que señalan que un plan de este tipo supondría un duro golpe para una economía en la que el 20% de la mano de obra la componen inmigrantes. Sectores como la construcción, la agricultura o la hostelería colapsarían; de ahí la insistencia en alcanzar un acuerdo de los dos grandes partidos con “políticas razonablemente” represivas.

El trumpismo tiene en el punto de mira al movimiento de solidaridad con Palestina, a la izquierda militante y antifascista, a los movimientos sociales y, especialmente, al sindicalismo

combativo que en estos años ha desafiado a grandes magnates como Jeff Bezos en Amazon, a las tres grandes de la automoción y a muchos de esos multimillonarios que simpatizan plenamente con Trump para que les garantice mano dura contra la clase obrera.

El trumpismo, y este es un rasgo característico del fascismo, utiliza la demagogia y el populismo, pero para golpear a la clase obrera y a la izquierda, esparciendo un anticomunismo histérico contra lo que huele a revolución.

La lucha de clases está entrando en una etapa mucho más dura, las tendencias autoritarias se refuerzan cada día más. La reelección de Trump profundiza estas tendencias desautorizando a esa izquierda reformista que apelaba y sigue apelando al Estado capitalista, a la democracia burguesa, para combatir a la ultraderecha y al fascismo. El Estado capitalista no solo no frena a la reacción, sino que la protege y la promueve, como ha quedado de sobra demostrado en EEUU.

Para enfrentar a Trump y a la ultraderecha solo hay un camino: construir una poderosa organización de la clase obrera y la juventud con un programa revolucionario y socialista, que impulse la movilización masiva de los oprimidos y la acción directa, incluyendo la autodefensa contra las bandas fascistas y la brutalidad policial.



La negligencia criminal de Mazón está probada

¡Hace falta una HUELGA en València p



Esquerra Revolucionària
País Valencià

La comparecencia de Mazón en las Corts Valencianes pasará a la historia como uno de los mayores ejemplos de falsedad jamás vistos en las tribunas de este circo parlamentario. Dos horas de manipulación y mentiras burdas para eludir responsabilidades y enrocarse en la presidencia de la Generalitat.

Es difícil imaginar que se tenga tan poca vergüenza. Incluso *El País*, portavoz de un importante sector de la oligarquía, ha sido rotundo en su editorial: "Mazón no puede seguir". Pero hay fuerzas políticas y económicas que pujan por mantener a este desecho político al frente del Govern.

La dirección estatal del PP sabe que utilizar a Mazón como chivo expiatorio sería un reconocimiento de su fracaso y un duro golpe a sus perspectivas electorales. Además, sería visto por millones como un triunfo de la movilización y eso también incomoda mucho al PSOE. Ni los ministros de Pedro Sánchez ni el presidente del Gobierno están exigiendo la dimisión de Mazón, y rechazan la convocatoria de elecciones anticipadas en València.

Sabiendo que el PSOE está en una posición de moderación porque no quiere desestabilizar políticamente nada, Feijóo ha diseñado un plan.

Primero, patada adelante y cargar todas las tintas sobre el Gobierno central, concretamente sobre la ministra Teresa Ribera. Segundo, y tras la multitudinaria manifestación del 9N en València, desviar la atención hacia esta sesión parlamentaria obligando a una remodelación del Consell que incluye la dimisión de sus consejeras más cuestionadas y la in-

corporación de altos mandos militares en posiciones claves para la reconstrucción.

El Gobierno central, por su parte, juega al tacticismo electoral. Conoce la rabia explosiva que se extiende y opta por desgastar a Mazón y al PP, pero dentro de un límite. Es muy consciente de que el desastre es demasiado grande como para no decir nada, pero no quiere alentar la protesta social y una movilización que, inevitablemente, también señala al Gobierno central como cómplice necesario en esta tragedia.

Para el Gobierno y el PSPV-PSOE lo mejor sería que Feijóo les entregara la cabeza de Mazón y continuar con su política de "unidad nacional" y legitimación de un Estado que ha sido puesto en entredicho por su actuación vergonzosa ante la catástrofe. Esto sería lo mejor, pero no lo van a tener.

Mienten más que hablan mientras la tragedia se amplía

PP, PSOE y patronal tienen una responsabilidad compartida, pero Mazón y su Gobierno no deberían permanecer ni un minuto más en sus puestos.

La negligencia con la que han actuado es la consecuencia de su programa. La primera medida del Ejecutivo valenciano de PP y Vox fue suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), que se creó tras la DANA del 2019. Lo más sangrante es que la UVE preveía mecanismos para alertar a la población respecto a emergencias sin la autorización directa del president a través del sistema Es-Alert, operativo y probado desde 2023.

Mazón ha ninguneado la importancia de haber eliminado la UVE. Pero es lógico, cuando es capaz de mentir y ha-

blar de un "apagón informativo" respecto al estado de las cuencas fluviales, ramblas, barrancos y ríos para no haber enviado antes la alerta. La Confederación Hidrográfica del Júcar mandó más de 60 correos electrónicos advirtiendo de la extrema peligrosidad de la situación, y cinco de ellos entre las 16:13h. y 18:43h. del 29 de octubre alertando de inundaciones inminentes en el barranco del Poio.

La pérdida de más de 220 vidas es la consecuencia más dolorosa y terrible de este crimen social. Y tras esta tragedia vendrán otras igual de graves y devastadoras.

Según el portal Datadista, las zonas inundadas afectan a más de 130.000 viviendas en 75 municipios, donde viven 1,8 millones de personas. A 18 de noviembre, el Consorcio de Compensación de Seguros había registrado solicitudes por daños en 48.003 viviendas, 8.785 comercios y almacenes, 670 oficinas, 2.658 instalaciones industriales y 30 obras civiles.

Y por eso es importante observar el comportamiento del Gobierno de PSOE-Sumar. En lugar de colocar los ingentes recursos del Estado para abordar las necesidades excepcionales de la población afectada y garantizar la atención a las víctimas, trazando un plan que incaute los fabulosos recursos en manos de bancos, grandes empresas y multinacionales para llevar a cabo la reconstrucción y acelerarla, el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vuelve a abrir una ventana de oportunidades para los mismos oligarcas que enviaron al matadero a sus empleados el día de las riadas.

Más de 1.209 empresas han presentado ERTE afectando a más de 16.000 trabajadores. Mientras los empresarios cobran las indemnizaciones de los seguros

y reciben millones en ayudas directas, se ahorran las nóminas que pagará el Ministerio de Díaz, pero por bastante menos del 100% de su cuantía.

Y que nadie dude que la epidemia de enfermedades mentales, depresión y ansiedad va a ser explosiva. ¿Qué medidas de choque van a adoptar el Gobierno central y la Generalitat para paliarla? Nos lo podemos imaginar viendo el estado deplorable de la sanidad pública tras años de recortes salvajes.

Es increíble que en medio de esta desolación, los empresarios amigos del PP se estén frotando las manos. STV Gestión SL, la exempresa de la mano derecha del president, José Manuel Cuenca, se ha llevado un contrato a dedo por valor de 290.000 euros, sin ningún tipo de oferta pública. Otro contrato de construcción ha sido regalado a Becsa, empresa vinculada a la trama Gürtel del PP, por valor de 3,9 millones. Y esto no ha hecho más que empezar.

PP, PSOE y todo este maldito sistema son responsables

Mazón es el culpable, pero aquí todos son responsables. El boom inmobiliario llenó litorales y zonas inundables de viviendas para familias trabajadoras a las que luego se ha asfixiado con intereses e hipotecas basura. Solo hay que ver la demografía de la zona cero: familias obreras, rentas bajas y mucha migración; es el cinturón sur del área metropolitana de València, donde vivimos 200.000 personas.

Conscientemente nos han puesto a vivir en zona de riesgo mientras la vivienda segura y de calidad en la ciudad y alrededores está destinada a la especu-



GENERAL para echarlo!

lación salvaje y al turismo. Las víctimas son nuestras familias por decisiones políticas tomadas desde los despachos del PP, que ha gobernado València 21 de los últimos 29 años, y también por los Gobiernos centrales del PSOE y sus socios, que no han hecho nada por acabar con este modelo de especulación criminal.

El PSPV, que gobernó en el País Valencià entre 2015 y 2023, miró hacia otro lado y no corrigió estos desmanes. Su legislatura fue una continuidad de la política de austeridad del PP. Así opera también el Gobierno central. Lejos de intervenir el mercado inmobiliario para garantizar un parque de vivienda pública con alquileres asequibles, gobierna en favor de caseros rentistas, bancos y fondos buitres, permitiendo miles de desahucios al año.

Es imprescindible mencionar la perspectiva climática en el litoral mediterráneo. El imparable calentamiento del mar tendrá como consecuencia la explosividad y recurrencia de estos fenómenos.

La alternativa capitalista es la salida individual, el sálvese quien pueda y ningún tipo de planificación. Un desastre asegurado para garantizar los beneficios insultantes de una minoría con muchísimo poder.

Combatir la unidad nacional y hacer caer a Mazón

Ahora mismo la táctica del PP y PSOE se basa en mantener la estabilidad. Tras el estallido de rabia en Paiporta contra la comitiva de Felipe VI, Sánchez y Mazón, y la manifestación gigantesca del 9 de noviembre, han visto el peligro y han cerrado filas.

Diana Morant, ministra de Ciencia y máxima dirigente socialista de València, ha ofrecido al PP sus votos para garantizar un Gobierno estable de la derecha con la única condición de forzar la salida de Mazón y que se nombre un Gobierno técnico.

CCOO y UGT convocaron un paro patronal de 10 minutos con la CEOE el

8 de noviembre. Forma parte de la misma estrategia de encubrir a los responsables de este crimen y fomentar la unidad nacional.

Pero con esta política, Mazón sigue en la poltrona y al mando. Su reforma del Consell ha consistido en incluir a dos generales de la reserva en el Gobierno, mandando un mensaje claro: no solo nosotros dirigimos esto, sino también militares preparados con un perfil técnico (¿no era esto lo que pedía Morant?). Son militares reaccionarios al servicio de políticas igual de reaccionarias y que pretenden imponer el “orden y mando” en una reconstrucción que no estará al servicio del pueblo. Un precedente muy peligroso: militares haciendo política, interviniendo para imponer su orden en el caos. Ya sabemos lo que esta militarización de la administración significa.

La solución a este desastre no es una utopía. Requiere de un programa y un plan de lucha, siguiendo el ejemplo de autoorganización e iniciativa de los miles de voluntarios y la combatividad de la manifestación del 9N y el motín de Paiporta.

Esta es la propuesta de los y las comunistas revolucionarios para la reconstrucción:

- **Revertir los recortes y privatizaciones en los servicios públicos** y realizar inversiones masivas para fortalecerlos, garantizando condiciones laborales dignas.

- **Suspensión inmediata de actividad económica y productiva no esencial en las zonas afectadas** garantizando permisos retribuidos. Toda la fuerza de la clase trabajadora debe estar dirigida y organizada para garantizar la búsqueda y recuperación de los desaparecidos, la limpieza de pueblos y barrios, y la reconstrucción.

- **Coordinación, desde abajo y democráticamente, de estas tareas de reconstrucción** y potestad de los comités de trabajadores para expropiar los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

- **Los seguros, propiedad de la gran banca, deben ser obligados por decre-**

to de emergencia a cubrir el 100% de los daños materiales de todas las pólizas afectadas. Las familias afectadas sin seguro deben estar cubiertas por el Estado que debe garantizar sus pérdidas.

- **Expropiación y nacionalización inmediata de los sectores estratégicos** —alimentación, vivienda, energía, transporte...—, para dedicar esos recursos a la reconstrucción y garantizar condiciones de vida dignas a los afectados. ¡Ni un solo euro de dinero público a las empresas para que hagan negocio con la reconstrucción!

- **Suspensión de alquileres e hipotecas**, expropiación de pisos de la banca, fondos de inversión y caseros rentistas para garantizar vivienda digna a todas las familias afectadas.

- **Sanciones ejemplares a empresas y empresarios** que evitaron que sus trabajadores pudieran marcharse a casa pese a los avisos de AEMET.

- **Dimisión de Mazón y su Gobierno** por su negativa a alertar a la población. Juicio y castigo ejemplar a los responsables de esta masacre.

Y para poder conseguirlo tenemos que mantenernos en las calles, organizados y movilizad@s.

El 23 de noviembre decenas de miles volvimos a salir para exigir un plan de rescate para los casi cien centros de estudio destruidos, y el 30 de noviembre una nueva y masiva manifestación exigió la dimisión de Mazón. Hay que constituir comités en los centros de estudio, de trabajo, barrios y localidades para convocar militantemente esta jornada, pegando miles de carteles, distribuyendo hojas e informando a toda la población.

El paso siguiente tiene que ser la convocatoria de una huelga general en València y paralizar la vida social y económica exigiendo que Mazón y su Gobierno se marchen ya, que no pueden permanecer más tiempo mintiendo y riéndose de las víctimas.

Este es el único camino realista para conseguir justicia y una reconstrucción al servicio del pueblo. Lo podemos hacer, lo debemos hacer.

12N

Los estudiantes salen a la calle en solidaridad con el pueblo de València



Sindicato de Estudiantes

El movimiento estudiantil ha vuelto a dar una enorme lección de dignidad, convirtiendo nuestro dolor, conmoción y rabia en un grito de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de València.

En una huelga secundada por cientos de miles, y con más de 30 movilizaciones, miles de gargantas nos hemos sumado al grito unánime que recorrió las calles de València el 9 de noviembre: “¡Mazón dimisión y a la prisión!”. Nos hemos dejado la voz en las concentraciones señalando a los culpables.

Carlos Mazón y el Gobierno del PP, los primeros responsables. Pese a las alertas meteorológicas no hicieron nada. Quienes recortan en sanidad y educación, en servicios forestales y en bomberos para regalar millones a la tauromaquia; quienes alientan la especulación inmobiliaria y que se construya en terrenos inundables para seguir haciendo nego-

cio... son responsables, y lo hemos gritado: “¡No son muertes, son asesinatos!”.

Juan Roig y los grandes empresarios también lo son. Por eso les hemos señalado: “Para producir nos envían a morir”, “No hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera”.

Y el Gobierno central, actuando como cómplice necesario y sin movilizar de inmediato todos los recursos del Estado. Ni bomberos, ni equipos de rescate, ni hospitales de campaña: “Mazón culpable, Sánchez responsable”, “El dinero del Borbón para la reconstrucción”.

Frente a la desidia y abandono institucional, hemos visto otra cara: autoorganización desde abajo, solidaridad de clase y, sí, que solo el pueblo salva al pueblo.

Miles de jóvenes, de trabajadores, con su ropa cubierta de lodo, caminando kilómetros, cruzando día tras día el puente de la solidaridad con palas, rastrillos... Estudiantes que se han negado a volver a clase para seguir ayudando, participando en las labores de limpieza y distribución

de alimentos. Todos ellos son a quienes los medios de comunicación y la derecha llaman la generación de cristal. No. Somos la generación que entiende que si no nos levantamos a defender nuestros derechos, nadie lo hará por nosotros.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado esta huelga porque es obligación de la juventud mostrar nuestro apoyo en este momento crítico. Para dejar claro que el enfado del pueblo valenciano no tiene nada que ver con esos grupúsculos fascistas miserables que intentan espar-

cir su demagogia racista aprovechándose de esta catástrofe. No hemos visto a los señoritos del PP ni de Vox ni a los matones de Desokupa limpiando barro. Los mamporreros del capital son nuestros enemigos y así lo hemos dicho.

Estamos con nuestros compañeros y compañeras hasta que se consiga justicia, que los responsables políticos vayan a la cárcel y que la reconstrucción esté al servicio del pueblo y no de los millonarios de siempre.





¡La huelga de alquileres es posible!

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Como en el caso de la catástrofe que sufre el pueblo valenciano, la responsabilidad política del PSOE y del PP es manifiesta. Ambos partidos son pilares de este modelo especulativo que nos roba el derecho a la vivienda.

El rentismo inmobiliario pisa el acelerador

El 30 de octubre se celebró en Madrid el Rental Housing Forum, un evento que reúne a los mayores inversores en el sector del alquiler en el Estado español. Este grupo de parásitos se regocijó con las grandes perspectivas que les abre nuestro país, donde ven un potencial de inversión de 380.000 millones de euros, ¡algo más del 24% del PIB español!

Esta inmensa movilización de capital generará beneficios astronómicos y un trasvase de rentas del bolsillo de la clase obrera al de los especuladores aún mayor. Una inversión que no se destinará a nueva construcción donde se necesita, sino a comprar vivienda de segunda mano.

Las cifras son reveladoras. En septiembre de este año la adquisición de vivienda usada creció un 41,5% respecto al año anterior y en octubre se formalizaron 51.952 compraventas. Lo más relevante es que solo se establecieron 22.625 préstamos hipotecarios, es decir, que bastante más de la mitad se pagó al contado, porque quienes las compran son empresarios especuladores o rentistas que disponen de fuertes sumas de dinero líquido, robadas de los salarios de sus inquilinos.

La consecuencia inmediata de esta ola especulativa que crece sin límites es la subida exponencial de los alquileres, que en los últimos cinco años ha superado en numerosas capitales el 40%.

Unificar las movilizaciones preparando la huelga de alquileres

Las manifestaciones masivas han acelerado las condiciones para un gran levantamiento social que acabe con el rentismo. En todas las ciudades se reivindica lo mismo: rebaja drástica de los alquileres como mínimo en un 50%, contratos

de alquiler indefinidos, prioridad de las necesidades de vivienda sobre el alquiler turístico, creación de un parque de dos millones de viviendas públicas con alquileres que no superen el 20% del SMI, expropiación de los pisos en manos de bancos, fondos buitres y caseros rentistas...

Reivindicaciones que ponen al descubierto que la vivienda se ha convertido en una causa de opresión y saqueo social inaceptable, reflejando la podredumbre del sistema capitalista. Y si este programa es fundamental, también se necesitan tácticas acertadas para lograr triunfos.

No tiene ningún sentido que el movimiento por la vivienda no se unifique. Existen motivos y razones más que obvias para golpear todos juntos al mismo tiempo. No hay ninguna razón, salvo una concepción estrecha y burocrática, para no dar continuidad a la masiva manifestación de Madrid del 13 de octubre, y haber confluído unitariamente con la movilización multitudinaria de Barcelona el 23 de noviembre. Es una reflexión importante que debemos hacer las organizaciones implicadas en esta batalla.

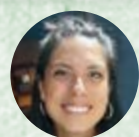
Un movimiento de masas de esta envergadura no se puede dirigir como si fuera un grifo, abriéndolo y cerrándolo según convenga a un pequeño círculo de "dirigentes". Es necesario aprovechar las enormes oportunidades que se han abierto para fortalecer la lucha, ampliando la participación popular en miles de asambleas y organizando miles de comités pro-huelga de inquilinas.

Este debe ser el objetivo prioritario. El Gobierno, el PP y los rentistas lo saben y lo temen. Si la huelga se materializa en el primer trimestre de 2025 y se logra la participación de miles de inquilinos, la presión será formidable. Es imposible desahuciar a cinco mil, diez mil o veinte mil personas. Los juzgados colapsarían. Como en otros movimientos de desobediencia civil la huelga encontraría un apoyo popular masivo y acompañada de movilizaciones multitudinarias se convertiría en un aldabonazo que ni este Gobierno ni los de las CCAA podrán resistir.

Es el momento de la audacia, de la organización y de golpear con más fuerza. Podemos lograr una victoria sonada que abra el camino a otras muchas.

21N Madrid

La séptima huelga docente ha sido otro éxito



Sandra Blázquez
Docente, activista de Menos Lectivas y militante de Izquierda Revolucionaria

El profesorado madrileño está protagonizando un primer trimestre del curso impresionante plantando cara a la Consejería de Educación y al Gobierno de Ayuso. Arrancamos con una jornada de paros el 25 de septiembre y los 29 de octubre y 21 de noviembre dos días de huelga muy contundentes. Hemos vuelto a demostrar la fuerza con la que luchamos por la reducción de horas lectivas, la bajada de ratio y la mejora de la educación pública.

La séptima huelga educativa ha sido secundada de nuevo por el 70%. Aunque la Comunidad de Madrid volvió a imponer servicios mínimos completamente abusivos, no impidió que nos organizáramos para que la jornada fuera un ejemplo de combatividad. En esta ocasión se unieron a la huelga las compañeras de las escuelas infantiles donde el seguimiento fue casi del 100%.

A las 12h. tuvo lugar una asamblea general en el parque de Peñuelas, donde nos juntamos más de 700 profesores y

maestros para debatir y decidir el calendario propio de Menos Lectivas. Una semana de lucha, encierros, una gran manifestación unitaria de los servicios públicos, una cadena humana, la posibilidad de una huelga indefinida... Se insistió en la necesidad de unificar todas las luchas y extender las consignas del profesorado a otros sectores de la administración pública: ¡contra los recortes del PP, en defensa de los servicios públicos, Ayuso dimisión!

El broche de oro lo pusimos con la manifestación de la tarde. Más de 20.000 docentes cantando consignas contra la privatización, contra el abandono de nuestros centros, por la contratación de personal para las aulas TEA y más orientadoras. Pero también enviamos muchos mensajes a los sindicatos de la Mesa Sectorial, que siguen despreciando al movimiento por abajo que hemos levantado desde Menos Lectivas: "¡no hay otra manera, o con el consejero o con las asambleas!".

No podemos bajar la guardia. El éxito tan rotundo de la movilización no es porque CCOO y UGT hayan convocado, sino porque las asambleas de centro nos lo hemos currado cole a cole, ins-



tituto a instituto, de forma democrática, no imponiendo fechas al margen de los activistas. La burocracia de CCOO y UGT quiere imponer un clima donde poder pactar con el consejero Viciano. Para que nuestras demandas no sean traicionadas, el único camino es seguir con la presión en las calles.

Hay que seguir organizando este movimiento para asestar un golpe mayor to-

avía al Gobierno de la CAM. ¡Ya somos más de 170 asambleas de centro en Menos Lectivas! Es fundamental que todas las fuerzas vayan al punto de ataque: docentes, estudiantes, AFAS, toda la comunidad educativa. ¡Convoquemos una huelga de 72 horas en febrero unificando el resto de luchas por todos los servicios públicos que también están bajo ataque! ¡Ni un paso atrás contra Ayuso!



Madrid



Asturias

Ideas y acción antifascista en más de una decena de actos

¡No pasarán!

El 22 de noviembre más de sesenta jóvenes, trabajadoras y trabajadores tuvimos una cita importante en el Espacio Rosa Luxemburgo de Madrid en pleno barrio de Carabanchel: un gran acto antifascista. Una actividad que se enmarca dentro de la campaña impulsada durante el mes de noviembre por Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes a lo largo y ancho de todo el Estado con el lema "Al fascismo no se le discute, se le combate".

Ante el auge de la extrema derecha a nivel internacional, el genocidio sionista y el militarismo más descarado, frente al aumento de las tendencias autoritarias de los Estados, el retroceso en derechos democráticos para la inmensa mayoría y la crisis de la izquierda institucional es imprescindible armarnos ideológicamente.

Y para ello comprender es clave. En primer lugar, de dónde surgen esas tendencias y, por otro lado, qué sirve y qué no para combatirlo.

Este ha sido el objetivo en la docena de ciudades por las que ya ha pasado esta campaña, desde A Coruña, Gijón, Oviedo, pasando por Bilbo, Gasteiz o Errenteria, hasta Barcelona y Tarragona o las ciudades andaluzas de Sevilla, Málaga y Cádiz. Miles de carteles y decenas de miles de octavillas han sido pegados y repartidos por nuestros compañeros y compañeras en institutos y universidades, en el transporte público que cogemos cada día, en plazas y barrios obreros...

Todo ello ha permitido confirmar el gran interés que despierta este tema entre la juventud, y también entre los trabajadores. Y no es casualidad. Somos quienes

vemos y sufrimos los ataques brutales y cada vez menos disimulados a los derechos democráticos, contra las mujeres y la comunidad LGTBI, a nuestros hermanos de clase inmigrantes, a sindicalistas y militantes de la izquierda combativa.

Los debates han sido muy participativos. En todos ellos, como no podía ser de otra manera, hemos enviado todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo valenciano, víctima de la negligencia criminal de Mazón, el PP y sus aliados de Vox, de sus políticas privatizadoras y de recortes. Al mismo tiempo, hemos insistido en la responsabilidad de un Gobierno del PSOE y Sumar que ha sido cómplice necesario en esta catástrofe.

Muy presente en las discusiones ha estado el genocidio sionista perpetrado en Gaza, ejemplo gráfico de qué significa

la acción de la ultraderecha en el poder. Una barbarie que ha cercenado ya la vida de casi 50.000 personas, que se extiende a Cisjordania y al Líbano, y que ha provocado una hambruna que multiplicará aún más esas cifras. Y todo ello, con la complicidad y connivencia de EEUU y la Unión Europea, incluido el Gobierno de Pedro Sánchez que más allá de las palabras se niega a romper relaciones económicas, militares y diplomáticas con el Estado nazi-sionista de Netanyahu.

Otros aspectos destacados han sido las elecciones en EEUU y la contundente victoria de Trump o el racismo que azuzan para dividirnos y desviar la atención del fondo de la cuestión: el sistema capitalista y su propiedad privada. Frente a esto, decimos: ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera! La lucha por los derechos de la mujer trabajadora y del colectivo LGTBI, la denuncia de un régimen del 78 en el Estado español que sigue manteniendo en el aparato del Estado a jueces, policías y altos funcionarios franquistas que jamás fueron depurados y que hoy siguen diseminando sus ideas reaccionarias...

La conclusión es clara. Hoy más que nunca, construir una organización revolucionaria es urgente para expulsar al fascismo y al sistema que lo genera al basurero de la historia.



Sindicato de Estudiantes / Libres y Combativas Asturias

Pocos días después de la agresión que nuestro compañero del Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria sufrió el 14 de septiembre por un grupo de Núcleo Nacional en Xixón, otra compañera de estas organizaciones y portavoz de Libres y Combativas recibía una llamada amenazándola de un reconocido fascista en Asturias. Este elemento habitualmente trata de reventar las movilizaciones feministas a través de insultos y amenazas a las mujeres que participamos y formamos parte activa del movimiento feminista combativo.

En la llamada justificó que nos agredieran por hacer actividad política pública y amenazó con que nos volvería a pasar a cualquiera de nosotras si no paramos. El feminismo combativo y de clase ataca a la médula del sistema capitalista y, por eso, estos grupúsculos fascistas que están proliferando, como Núcleo Nacional, Frente Obrero, Hacer Nación o Revuelta, no pueden soportarlo y salen a volcar su odio, hostigando e intentando amedrentarnos.

Alentados por los discursos de odio, racistas, lgtbifóbicos y negacionistas de

Fascista condenado por amenazas a una compañera del Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas en Asturias

la derecha y la extrema derecha, de PP y Vox, están cada vez más envalentonados porque cuentan con la complicidad de la policía y de un sistema judicial que nunca fue depurado y tiene jueces franquistas que les aseguran total impunidad. Y todo ello ante la pasividad de una izquierda reformista que no hace nada serio por frenarlos.

Denunciamos los hechos en la policía; pero sabemos cómo funciona la justicia y de parte de quién está. Por eso, respondimos a través de la organización colectiva, haciendo públicas estas agresiones y llamando a la solidaridad. La mejor muestra de que este es el camino la tenemos en el comunicado "Fuera fascistas de nuestras calles. Ninguna agresión sin respuesta", firmado por más de una treintena de organizaciones de la izquierda asturiana y presentado en una rueda de prensa en la plaza del ayuntamiento de Xixón.

El 11 de noviembre se celebró el juicio y convocamos una concentración previa

en las puertas de los juzgados donde participamos varias de estas organizaciones. Este fascista se presentó con una bandera de España con el escudo recortado y al grito de "Arriba España". Este es el nivel.

Cuatro días después conocíamos la sentencia: multa de 720 euros, una indemnización de 300 y orden de alejamiento de 300 metros durante seis meses. Una vic-

toria fruto de la lucha y la organización colectiva. Es una victoria de todo el movimiento y manda un mensaje nítido: continuaremos dando la batalla, organizándonos y señalando sin miedo a quienes atacan nuestros derechos, y también exigiendo sentencias ejemplares. ¡Al fascismo no se le discute, se le combate!



Manifestaciones multitudinarias por el derecho a la vivienda

¡La HUELGA de ALQUILERES ES POSIBLE!



Izquierda
Revolucionaria

El tablero político está patas arriba. Desde abajo, gracias al trabajo de miles de activistas organizados en sindicatos de inquilinas, sindicatos de vivienda y colectivos militantes, las manifestaciones multitudinarias contra los caseros rentistas y la especulación inmobiliaria han llenado las calles de todos los territorios.

La lucha por una vivienda digna señala directamente al Gobierno del PSOE y a las comunidades autónomas dirigidas por el PP, que con sus políticas nefastas llenan los bolsillos de los grandes especuladores a costa de nuestro empobrecimiento. Madrid y Barcelona han sido la punta de lanza, con manifestaciones en las que han participado cientos de miles, pero lo mismo ha sucedido en Málaga, Sevilla, Valencia y otras capitales desbordadas por la indignación y la furia contra este robo a mano armada.

Este es el epicentro de un nuevo ascenso de la lucha de clases, que puede convertirse en el movimiento de desobediencia civil más grande de las últimas décadas.

La realidad es concreta: el derecho a la vivienda no existe, se ha transformado en un negocio fabuloso en manos de rentistas profesionales, bancos, inmobiliarias y empresas como Airbnb, mientras los poderes políticos los protegen con una legislación que solo vela por sus intereses y que se blinda con miles de desahucios ejecutados por la policía en colaboración abierta con las bandas fascistas de Desokupa.

Por eso la situación ha llegado a un punto límite. Ya no se puede engañar a la gente con el argumento de que esto es un problema de la derecha, de Ayuso y

el PP. Por supuesto, ellos son muy responsables de alimentar la especulación y la privatización de los servicios y los espacios públicos, pero el Gobierno central del PSOE y Sumar sigue la misma estela, propiciando que el mercado inmobiliario sea una fuente de lucro excepcional, mientras la vivienda pública, digna y asequible simplemente no existe.

En la manifestación de Barcelona esta indignación con el PSOE se mostró con la mayor energía. Con un Ayuntamiento y un Gobierno autonómico en manos del PSC, las medidas de limitación de alquileres aprobadas son una auténtica burla: sin inspecciones y sin sanciones los caseros se las saltan alegremente o directamente se pasan al alquiler de temporada, una modalidad que el PSOE se ha negado sistemáticamente a frenar.

Este sector social parasitario ha sido uno de los principales beneficiados de las políticas del Gobierno central y de los autonómicos. En la Comunidad de Madrid, los rentistas que se lucran con pisos turísticos, con el alquiler de habitaciones o de tugurios que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad son una parte

importante de los fans incondicionales de Ayuso y Vox que, bajo la mirada tolerante del Gobierno de Sánchez, les favorecen con sus medidas y hacen la vista gorda al cúmulo de irregularidades que comenten cada día.

Frente a esos parásitos debemos reivindicar que la única forma de garantizar una vivienda digna y asequible a todos los que la necesitan es mediante la constitución de un parque de vivienda pública en alquiler social y controlada por los sindicatos de inquilinos e inquilinas, es decir, por los propios afectados.

Este parque tiene que nutrirse, en primer lugar, con las viviendas que hoy son propiedad de bancos, sociedades de inversión y caseros rentistas. ¡Ya han saqueado nuestros bolsillos durante demasiado tiempo y ha llegado el momento de que la vivienda deje de ser pasto de la especulación y sea un derecho efectivo!

PASA A LA PÁGINA 6 ▶

